

La izquierda campesina e indígena en Bolivia. El Movimiento Al Socialismo (MAS)

FERNANDO MAYORGA*

Resumen

Nuestra reflexión gira entorno a: ¿Cuáles son las razones del surgimiento de nuevas fuerzas de izquierda, como el MAS, con capacidad de disputar el poder político? ¿Qué rasgos presenta en términos organizativos, discursivos y de acción política? Como también, ¿cuáles son las características de su desempeño político-electoral y sus perspectivas al mando del gobierno en un contexto signado por la crisis? En lo que sigue, trazaremos (i) los rasgos del contexto de crisis inaugurado al influjo de protestas sociales que cuestionaron el modelo económico y el sistema político, (ii) la recomposición del sistema de partidos como efecto de los procesos electorales de 2002 y 2005, mediados por los cambios provocados por los hechos de octubre de 2003, (iii) los orígenes, trayectoria electoral, desempeño político y características del MAS, y finalmente, (iv) el nuevo escenario político y las perspectivas del gobierno presidido por Evo Morales.

Palabras clave: La izquierda, desempeño político, recomposición del sistema de partidos, Bolivia.

Abstract

Ours reflections tour surroundings a: when are the reasons of the sprouting of new forces of left, like the MAS, with capacity to dispute the politico power? What characteristics presents/displays in organizational, discursive terminus and of action political? Like also, when is the characteristics of their politics-electoral performance and its perspective to the control of the government in a context signed by the crisis? In which it follows, we will draw up to (i) the characteristics of the context of crisis inaugurated to the influence of social protests that questioned the economic model and the politics system, (II) reorganizations of the system of parties like effect of the electoral processes of 2002 and 2005, half-full by the changes caused by the facts of October of 2003, (III) origins, electoral trajectory, decamped politics and characteristics of the MAS, and finally, (IV) the new politico scene and the perspective of the government presided over by Evo Morales.

Key words: The left, politics to performance, reorganizations of the system of parties, Bolivia.

Director Académico del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Cochabamba. Bolivia

EN LOS COMICIOS GENERALES REALIZADOS EN DICIEMBRE DE 2005, el Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzó una inédita victoria obteniendo más de la mitad de los votos y Evo Morales se transformó en el primer candidato que accede a la presidencia de la República por mandato popular y sin necesidad de negociaciones parlamentarias.

Este contundente triunfo constituye un hito histórico por dos razones. Por una parte, porque se cierra un ciclo del período democrático iniciado en 1982 que se caracterizó por la conformación de coaliciones de gobierno mediante pactos partidistas debido a la ausencia de un vencedor en las urnas con mayoría absoluta². Por otra parte, porque la presencia de un líder campesino-indígena en el cargo de primer mandatario pone fin a un sistema –formal e informal- de exclusión política y social vigente desde la fundación de la República. Como señala un slogan del organismo nacional electoral para promover la participación ciudadana: “Ahora la democracia, es diferente”, independientemente de los rasgos que asuma la futura gestión gubernamental. En este trabajo, analizamos los rasgos principales de esta fuerza política y las vicisitudes de su trayectoria en un contexto caracterizado por la crisis y recomposición del sistema de partidos y enmarcado en un proceso de transición hacia una nueva forma estatal.

Antecedentes

En junio de 2005 concluyó una aguda crisis política con la segunda renuncia presidencial en veinte meses y un acuerdo congresal para adelantar las elecciones generales para diciembre de ese año. El período constitucional iniciado en agosto de 2002 quedó trunco y la presencia de tres presidentes en un lapso de algo más de dos años y medio puso en evidencia de la profundidad de la crisis política. Sánchez de Lozada del MNR, elegido presidente en agosto de 2002 mediante una segunda vuelta congresal, se vio obligado a renunciar y a huir del país como resultado de una revuelta popular que concluyó el 17 de octubre de 2003 con la sucesión constitucional en la figura del vicepresidente Carlos Mesa. Otra ola de protestas sociales y el agravamiento de las pugnas entre los poderes ejecutivo y legislativo abrió una coyuntura de intensa conflictividad que culminó con la renuncia de Mesa en junio de 2005 y la presidencia fue asumida por Eduardo Rodríguez, cabeza de la Corte Suprema de Justicia, como último eslabón en la cadena de sucesión constitucional y con el mandato específico de convocar a elecciones generales. Esta fría crónica de hechos

no desdeña la gravedad de los acontecimientos vividos en el transcurso de un conflicto que sacudió al país durante tres semanas con cercos campesinos a varias ciudades, manifestaciones multitudinarias, bloqueos en las carreteras, paros cívicos y huelgas de hambre y un espacio de discursividad política exacerbado con consignas de nacionalización, autonomías regionales, asamblea constituyente, golpe de estado, insurrección, gobierno civil-militar, clausura del parlamento, renuncia presidencial e, inclusive, voces agoreras que alertaban sobre el riesgo de una “guerra civil”. El saldo fue la muerte trágica de un trabajador minero y la sensación de que la crisis política se había convertido en un rasgo habitual de la democracia boliviana.

Una crisis vinculada, entre otros factores, al agotamiento del proyecto instaurado desde mediados de los 80’ –en torno a la articulación hegemónica del neoliberalismo económico y la democracia centrada en el sistema de partidos– y a una compleja transición hacia una nueva forma estatal. Bolivia, desde principios de este siglo, vive transformaciones en el modelo económico, el sistema político, el tipo de Estado y en el proyecto de nación en un contexto de fragmentación social, polarización política y confrontación ideológica que expresan la existencia de diversas fracturas o clivajes (mercado/estado, regional y étnico-cultural) y dificultan la articulación de un nuevo principio hegemónico capaz de remozar las pautas de relación entre Estado, política, economía y sociedad.

En este contexto se sitúa el renovado protagonismo de la izquierda que se inicia en las elecciones presidenciales de 2002 (Cuadro 8), a través de nuevas expresiones partidistas, como el MAS y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), después de quince años de actuación marginal en el escenario parlamentario. El actual período democrático se inició en 1982 con el gobierno de Siles Zuazo a la cabeza de la Unidad Democrática y Popular (UDP). La izquierda, a través de la UDP, y otras agrupaciones menores obtuvo la mitad de la votación nacional (Cuadro 1) pero estas fuerzas no conformaron una coalición gubernamental y la UDP, sin mayoría parlamentaria, inició una gestión que naufragó en una aguda crisis económica y política debido a la imposibilidad de responder a las demandas sociales y al boicot de la mayoritaria oposición congresal. El resultado fue la reducción del período presidencial y el adelantamiento de elecciones para 1985 que concluyeron con la victoria del ex-dictador Bánzer Suárez y su partido de derecha, Acción Democrática Nacionalista (ADN), pero con la elección congresal de Paz Estensoro, del centrista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), como presidente. En esos comicios, las fuerzas de izquierda disminuyeron su votación a cerca

Cuadro 1. Elecciones nacionales, 1980

Partido	Votación	Porcentaje
UDP	507.173	34.1
MNRA	263.706	17.0
ADN	220.309	14.8
PS-1	113.959	7.7
FDR	39.401	2.6
PRA-A	36.443	2.4
MNRU	24.542	1.6
FSB	21.372	1.4
AFIN	17.150	1.2
MITKA-1	17.023	1.1
PUB	10.308	1.1
MITKA	15.852	1.1
PRIN-A	15.724	1.1
Votos emitidos: 1'489.484		

Cuadro 2. Elecciones nacionales, 1985

Partido	Votación	Porcentaje
ADN	493.737	28.6
MNR	456.704	26.4
MIR	153.143	8.9
MNRI	82.418	4.8
MNRV	72.197	4.2
PS-1	38.786	2.2
FPU	38.124	2.2
MRTKL	31.678	1.8
PDC	24.079	1.4
FSB	19.958	1.2
MRTKL	16.269	0.9
POR	13.712	0.8
ACP	12.918	0.8
MNRI-1	11.696	0.7
IU	10.892	0.6
FNP	9.635	0.6
AUR	9.420	0.5
ARENA	8.665	0.5
Votos emitidos: 1'504.060		

del 10% (Cuadro 2) y ese fue el promedio que obtuvieron en las sucesivas elecciones presidenciales de 1989, 1993 y 1997 (Cuadros 3, 4 y 5). Desapareció el MNRI, la izquierda vinculada al sindicalismo obrero se dividió y el MIR se transformó en un partido pragmático y, además, surgieron dos partidos de cuño neopopulista, Conciencia de Patria (Condepa) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que entre 1989 y 1999 concentraron los votos de un tercio del electorado con arraigo en sectores populares.

En junio de 2002 se produjo la participación electoral de nuevos partidos de izquierda y liderazgos de raigambre campesina e indígena que modificaron la trama de la representación y los contenidos de la discursividad política. La fundación del MAS en 1999 y del MIP en 2000 inauguran también un nuevo ciclo en la historia de la izquierda porque son organizaciones que surgen del ámbito sindical campesino e indígena con líderes propios Evo Morales y Felipe Quispe, respectivamente³, y se diferencian de la izquierda tradicional vinculada al movimiento obrero o universitario y conducida por dirigentes de sectores medios urbanos.

En su primera participación electoral, el MAS obtuvo un sorpresivo segundo lugar y Evo Morales disputó la presidencia en la instancia congresal siendo derrotado por Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR (Cuadro

Cuadro 3. Elecciones nacionales, 1989

Partido	Votación	Porcentaje
MNR	363.113	23.1
ADN	357.298	22.6
MIR	309.033	19.6
CONDEPA	173.459	11.0
IU	113.509	7.2
PS-1	39.763	2.5
MRTKL	22.983	1.5
FULKA	16.416	1.0
FSB	10.608	0.7
MIN	9.687	0.6
Votos emitidos: 1'415.870		

Cuadro 5. Elecciones nacionales, 1997

Partido	Votación	Porcentaje
ADN	485.209	22.3
MNR	396.216	18.2
CONDEPA	373.516	17.2
MIR	365.113	16.8
UCS	350.742	16.1
IU	80.599	3.7
MBL	67.152	3.1
VSB	30.214	1.4
EJE	18.32	0.8
PDB	10.378	0.5
Votos emitidos: 2'177.558		

Cuadro 4. Elecciones nacionales, 1993

Partido	Votación	Porcentaje
MNR	585.837	33.8
Acuerdo Patriótico	346.813	20.0
CONDEPA	235.428	13.6
UCS	226.820	13.1
MBL	88.260	5.1
ARBOL	30.864	1.8
ASD	30.286	1.7
VR9	21.100	1.2
FSB	20.947	1.2
EJE	18.176	1.0
IU	16.137	0.9
MKN	12.627	0.7
Independientes	8.0960	0.5
Votos emitidos: 1'731.309		

Cuadro 6. Elecciones municipales, 1999

Partido	Votación	Porcentaje
MNR	408.824	20.4
MIR	319.399	16.0
ADN	292.803	14.6
UCS	237.094	11.8
NFR	166.173	8.3
MSM	116.652	5.8
MBL	89.505	4.5
CONDEPA	80.857	4.0
MAS	65.425	3.3
PS	55.823	2.8
VR-9	43.713	2.2
FSB	43.364	2.2
FRI	37.833	1.9
PCB	22.502	1.1
KND	8.216	0.4
PDC	7.538	0.4
MPP	4.607	0.2
MRTKL	1.473	0.1
Votos emitidos: 2'124.509		

8). En conjunto, la izquierda alcanzó un cuarto de la votación y una representación similar en el parlamento, sin embargo, este proceso electoral tuvo un sello peculiar porque fue la primera incursión exitosa de campesinos e indígenas en la arena parlamentaria a través de organizaciones políticas propias y la primera vez que un candidato de estos sectores encaró la posibilidad de disputar la presidencia. Esta posibilidad se convirtió en realidad en diciembre de 2005 merced a la mayoría absoluta obtenida por Evo Morales que transforma al MAS en la principal fuerza política del país (Cuadro 9) e implica el

retorno de la izquierda al poder político, después de dos décadas, con nuevos actores, discursos y propuestas.

¿Cuáles son las razones del surgimiento de nuevas fuerzas de izquierda, como el MAS, con capacidad de disputar el poder político? ¿Qué rasgos presenta en términos organizativos, discursivos y de acción política? Finalmente, ¿cuáles son las características de su desempeño político-electoral y sus perspectivas al mando del gobierno en un contexto signado por la crisis?

En lo que sigue, trazaremos (i) los rasgos del contexto de crisis inaugurado al influjo de protestas sociales que cuestionaron el modelo económico y el sistema político, (ii) la recomposición del sistema de partidos como efecto de los procesos electorales de 2002 y 2005, mediados por los cambios provocados por los hechos de octubre de 2003, (iii) los orígenes, trayectoria electoral, desempeño político y características del MAS, y finalmente, (iv) el nuevo escenario político y las perspectivas del gobierno presidido por Evo Morales.

De la estabilidad a la crisis

Entre 1985 y 2002, el sistema político se caracterizó por la centralidad del sistema de partidos sometido a una lógica de pactos y acuerdos que fortalecieron los rasgos de presidencialismo híbrido del régimen de gobierno (Gamarra 1992). Las gestiones gubernamentales bajo esta modalidad de funcionamiento, denominada convencionalmente *democracia pactada*, se sustentaron en coaliciones de gobierno con mayoría parlamentaria y, relativamente, en acuerdos entre oficialismo y oposición. Un multipartidismo moderado, con cinco fuerzas parlamentarias relevantes y tres partidos (MNR, ADN y MIR) con presencia alternada en el manejo gubernamental, que se reprodujo bajo una tendencia centripeta merced a la capacidad hegemónica de un proyecto estatal asentado en una política económica que propició el desmantelamiento del Estado intervencionista y en un modelo de gobernabilidad basado en la conformación de coaliciones mayoritarias y la subordinación del parlamento al poder ejecutivo. Sin embargo, pese a la estabilidad macroeconómica, los saldos negativos del proceso de capitalización de las empresas estatales destinado a atraer inversión extranjera para propiciar crecimiento y generar empleo pusieron en cuestión la legitimidad del modelo económico y surgieron posturas contestatarias que, desde el año 2000, se tradujeron en intensas protestas sociales. Asimismo, la *democracia pactada* perdió paulatinamente

su capacidad representativa porque fue utilizada de manera instrumental por las coaliciones gubernamentales transformando su mayoría parlamentaria en un “rodillo” que excluyó a la oposición parlamentaria y sometió la administración estatal a una lógica clientelar y prebendalista.

El proceso electoral de 2002, pese a que concluyó con la elección de Sánchez de Lozada mediante una coalición conformada por MNR y MIR, puso en evidencia la mengua de la capacidad hegemónica del proyecto inaugurado en 1985 puesto que surgieron nuevos actores políticos, como el MAS, MIP y Nueva Fuerza Republicana (NFR), esgrimiendo un discurso contestatario al neoliberalismo y una crítica acerba a los partidos tradicionales.⁴

La irrupción de nuevos contenidos discursivos en el escenario político y el respaldo electoral a fuerzas emergentes fueron algunos de los resultados de la acción de movimientos sociales y sindicales cuyas protestas pusieron en evidencia los límites de la *democracia pactada* para la representación de intereses y canalización de demandas sociales. La denominada “guerra del agua” en Cochabamba, en abril de 2000, fue el acontecimiento que marca el inicio de un ciclo de protestas que tuvo como características principales la ausencia de mediaciones partidistas, la impugnación a la privatización de las empresas públicas, la debilidad estatal para sofocar las protestas mediante sus aparatos represivos y la organización de la acción colectiva bajo nuevos parámetros organizativos. Esta protesta urbano-rural coincidió con el inicio de movilizaciones campesinas e indígenas en la zona del altiplano a través de bloqueos de carreteras que adquirieron una fuerza inusitada y obligaron al gobierno de turno a negociar con los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En septiembre de ese año, la protesta campesina e indígena en el altiplano adquirió contornos de un levantamiento generalizado porque se combinó con los bloqueos de carreteras realizados por los campesinos productores de coca convertidos, desde fines de los 80, en una fuerza sindical con enorme capacidad organizativa para enfrentar la política de erradicación de plantaciones de coca que se había constituido en un tema crítico de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos. Paralelamente, con antecedentes desde 1990, los pueblos indígenas de los llanos y a la amazonía realizaron una serie de extensas marchas reclamando tierra y territorio, reconocimiento de derechos colectivos y mayor participación ciudadana.

Al unísono con demandas sectoriales, estas protestas plantearon reivindicaciones políticas siguiendo una larga tradición del sindicalismo boliviano y porque en su seno actuaban los líderes y partidos de izquierda emergentes

del ámbito campesino e indígena. Varios de los nuevos contenidos de la actual discursividad política surgieron de estas protestas, como la demanda de asamblea constituyente que fue esbozada por los pueblos indígenas de las tierras bajas, adquirió ímpetu después de la “guerra del agua”, se convirtió en un elemento central del debate electoral en 2002 y, desde entonces, es un tema crucial de la agenda política. Algo similar ocurrió con la demanda de “recuperación” de la propiedad estatal de los recursos naturales, porque a partir de la expulsión de la empresa transnacional encargada del servicio de agua potable en Cochabamba se produjeron acciones análogas en otras ciudades, como El Alto. El nacionalismo estatista adquirió nuevos matices durante el proceso electoral de 2002 y fue enarbolado en la revuelta popular de octubre de 2003. A partir del debate sobre los hidrocarburos y los servicios de agua potable, las propuestas de nacionalización apuntaron a otros sectores de la economía y fueron incorporadas al discurso de la izquierda en su intención de “desmontar el neoliberalismo”.

Precisamente, el tema de la exportación de gas natural estuvo en el núcleo de la protesta social que culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada. La revuelta de octubre de 2003 tuvo como antecedente una protesta urbana, a principios de febrero, que terminó incendiando edificios públicos y sedes de partidos oficialistas y provocando saqueos y vandalismo ante la ausencia de fuerzas policiales amotinadas y militares que se enfrentaban en la plaza Murillo, sede del palacio presidencial y del parlamento. La protesta estaba dirigida contra el “impuestazo” y era una expresión de rechazo a la política económica que pretendía disminuir el déficit fiscal mediante impuestos al salario. La indefensión estatal ante la protesta y la posterior represión militar que provocó varias víctimas fatales pusieron en evidencia el grado de deslegitimación del modelo económico y establecieron los límites estrechos de la acción gubernamental. La denominada “guerra del gas” en octubre –con sesenta víctimas fatales y medio millar de heridos por la represión policial y militar– se inició como una protesta contra supuestos planes de exportación de gas natural por Chile y tuvo como protagonistas a juntas de vecinos, sindicatos mineros y organizaciones campesinas e indígenas –secundariamente, a los partidos de oposición– y se concentró en las ciudades de El Alto y de La Paz y en zonas rurales del altiplano, donde se produjo la primera acción punitiva del ejército. La protesta involucró a otros sectores sociales hasta culminar con la renuncia de Sánchez de Lozada y la sucesión constitucional en la figura del vicepresidente Carlos Mesa, siendo decisivo el apoyo del MAS para el sostén de la estabilidad democrática e institucional. El gobierno de Carlos Mesa se inició con el predominio de la izquierda cuyas demandas se concretaban en

un referéndum vinculante para redefinir la política hidrocarburífera mediante una nueva ley y la convocatoria para la realización de una asamblea constituyente dirigida a “refundar el país”. Debido a la derrota de los partidos de la coalición gubernamental, el MAS se convirtió en la fuerza política más importante del país, sin embargo, la correlación de fuerzas en el parlamento quedó relativamente intacta y este hecho tendría consecuencias decisivas para el decurso de la gestión gubernamental que adquirió contornos inéditos puesto que marcó el fin de la *democracia pactada* e inauguró un proceso de transición con derrotero incierto.

Los avatares de una transición

En octubre de 2003 se inauguró una fase con el sello de la primacía de la política pero sin la centralidad partidista que caracterizaba a la *democracia pactada*. Los espacios institucionales de la política se sometieron a la influencia de la acción directa de los movimientos sociales, aunque el carácter de las demandas y sus exigencias procedimentales (referéndum, asamblea constituyente, nueva ley de hidrocarburos) condujeron a su inevitable tratamiento en el ámbito legislativo.

El gobierno de Carlos Mesa no se sustentó en una coalición partidista y careció de bancada parlamentaria, por ello las relaciones congresales no se reflejaron en tendencias constantes sino en alianzas circunstanciales. Con todo, los partidos tradicionales –MNR, MIR y ADN– se transformaron en oposición parlamentaria, en cambio, el MAS adoptó una postura cooperativa hacia el gobierno a partir de coincidencias en temas cruciales. La importancia del parlamento con mayoría opositora y la carencia de fuerza congresal por parte del gobierno, sumados al descrédito de los partidos de oposición y a la popularidad del presidente, se tradujo en una pronta relación de mutuo bloqueo institucional entre poder ejecutivo y legislativo. Esto ocurrió en aspectos secundarios, como nombramientos de autoridades, y en temas cruciales, como la política hidrocarburífera. Estas relaciones también se vieron entorpecidas por la estrategia comunicacional que adoptó el presidente porque se apoyó en el uso de medios de comunicación masiva y en la apelación argumentativa mediante continuos “mensajes a la nación”, utilizando a la opinión pública como medio de presión al parlamento.

Los cambios políticos tuvo inmediatos efectos institucionales con la aprobación de una reforma constitucional en febrero de 2004 que incorporó institu-

ciones de democracia participativa como el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana y la asamblea constituyente. Asimismo, se incorporaron nuevas pautas para la competencia electoral incorporando otros actores, bajo la figura de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con el criterio de romper el monopolio partidista en la representación política, una demanda también enarbolada por la izquierda. La incorporación del referéndum tornó más complejo el proceso decisional político porque, debido a la existencia de diversas interpretaciones de los resultados de la consulta popular, la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos demandó diez meses de tratamiento congresal.

Esta complejización del proceso decisional ahondó la creciente polarización política que adquirió contornos más preocupantes porque otra intensa movilización social, en enero de 2005, modificó el escenario político a partir de la irrupción de otros actores, como los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija –regiones en las cuales se encuentran los yacimientos de gas– y gremios empresariales opuestos a la nacionalización y a la asamblea constituyente. Estos sectores esgrimieron otras demandas, como la convocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales, una propuesta de descentralización política orientada a la reestructuración del Estado centralista, y la elección directa de autoridades políticas departamentales (prefectos) en detrimento de la prerrogativa presidencial para su designación.

A partir de entonces, a la *agenda de octubre* (nacionalización de hidrocarburos y asamblea constituyente) se contrapuso la *agenda de enero* (referéndum sobre autonomías departamentales y elección de prefectos) y el accionar parlamentario se dividió de manera más compleja porque las bancadas partidistas actuaban de manera indistinta de acuerdo a los temas en cuestión y en algunas circunstancias eran desplazadas por las brigadas departamentales que respondían a presiones regionales. Así, a los actores sociales y políticos divididos por orientaciones programáticas disímiles en torno a la política hidrocarburífera y la asamblea constituyente se sumó una contradicción de carácter regional.

Una de las consecuencias de esta modificación en el escenario político fue la renuncia de Carlos Mesa y, luego, una propuesta de acortamiento de mandato y convocatoria a elecciones generales. Esto ocurrió en marzo de 2005 y aunque ambas iniciativas fueron rechazadas por el parlamento, el presidente atacó duramente al MAS asumiendo el discurso de los adversarios de Evo Morales, acusado de la autoría de las protestas callejeras. Esta ruptura de la relación cooperativa entre el MAS y el gobierno provocó que las manifestaciones de apoyo de sectores medios urbanos a la figura del presidente aparez-

can revestidas de consignas anticampesinas y antiindígenas. La impugnación a la conducta del MAS también estaba orientada a incidir en el debate congresal sobre la nueva ley de hidrocarburos sobre cuya versión preliminar el poder ejecutivo tenía más críticas que coincidencias —la comisión respectiva estaba presidida por un diputado del MAS— puesto que cada uno entendía de manera distinta la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos. Pese a las diferencias, esta norma legal expresaba una resolución del clivaje mercado/estado porque anulaba la antigua ley favorable a los inversores extranjeros y restituía el protagonismo de la empresa pública en el rubro estableciendo, además, un incremento en los impuestos. Esta ruptura y la promulgación de una ley que no contentó a nadie —ni al poder ejecutivo, ni al MAS, ni a los empresarios— provocó una segunda ola de protestas sindicales con la consigna de nacionalización de los hidrocarburos. El MAS adoptó una postura centrista frente a dos posiciones maximalistas (de los empresarios que exigían el veto presidencial a la nueva ley por su carácter confiscatorio y de algunos sectores radicalizados —maestros, universitarios, juntas de vecinos— que la desechaban porque no interpretaba la demanda de nacionalización) puesto que defendió la aprobación de la nueva ley pero planteó su modificación mediante procedimiento legislativo.

Sin embargo, si la nacionalización de los hidrocarburos dividía el accionar de la izquierda partidista y sindical, estos actores coincidían en el pedido de convocatoria a la asamblea constituyente y en el rechazo al referéndum sobre autonomías departamentales. Precisamente, la crisis política de junio que deriva en la renuncia definitiva de Carlos Mesa tiene como una de sus causas a la imposibilidad de conciliar un acuerdo congresal que permita la realización simultánea de ambos eventos, propuesta defendida por el MAS. Ante el impasse parlamentario, el presidente emitió un decreto convocando a la realización de ambas consultas electorales pero su suerte estaba echada. En las calles, la protesta social por la nacionalización había adquirido contornos de una movilización similar a la de octubre de 2003 y la crisis política fue resuelta con una nueva sucesión constitucional llegando a su fin el primer intento de gestión gubernamental sin coalición partidista ni mayoría parlamentaria. Después de este fracaso, y con la deslegitimación de la *democracia pactada* a costas, el sistema de partidos enfrentaría nuevos desafíos por efecto de las modificaciones en su composición y en sus pautas de interacción.

El sistema de partidos: estabilidad, crisis y recomposición

Desde octubre de 2003, el sistema de partidos se encuentra sometido a un intenso proceso de recomposición, cuyos antecedentes se remontan a los resultados electorales de junio de 2002. Si bien las negociaciones post-electorales de ese año concluyeron con la conformación de una coalición gubernamental entre partidos tradicionales, con la caída de Sánchez de Lozada se inició una nueva fase en el sistema de partidos caracterizada por la incertidumbre respecto a su derrotero debido a la crisis política y a su intento de resolución mediante la convocatoria anticipada a elecciones generales para diciembre de 2005, cuyos resultados configuraron un nuevo escenario político.

En lo que sigue, efectuamos un balance de este proceso considerando los resultados de los comicios presidenciales de 2002; los cambios acontecidos octubre de 2003, prestando atención a la realización del referéndum y al impacto de las elecciones municipales de 2004; y los efectos políticos de las elecciones de diciembre de 2005.

Comicios de 2002 e irrupción de la izquierda

Las elecciones de 2002 modificaron de manera sustantiva la composición del sistema de partidos que, después de más de diez años de funcionamiento estable con base en cinco partidos políticos (MNR, ADN, MIR, UCS y Condepa), sufrió la irrupción de nuevas fuerzas políticas (MAS, NFR y MIP) que enarbolaron posiciones contestatarias y ocuparon tres de las cinco posiciones de privilegio entre los partidos con presencia parlamentaria. Es decir, las posturas opositoras circunscritas, en cierta medida, a la acción de los movimientos sociales tuvieron su expresión en el escenario parlamentario a través de la presencia de fuerzas de izquierda, como el MAS y el MIP, denotando un desplazamiento de las relaciones de antagonismo entre movimientos sociales y partidos políticos –que se manifestaron a partir de las protestas sociales de 2000 con una impugnación general a la *democracia pactada* y al neoliberalismo– hacia un política agonal caracterizada por la existencia de alternativas electorales de diversa impronta programática y con capacidad de disputar el poder político.

Para comprender las consecuencias de este cambio es preciso esbozar, brevemente, las fases por las que transcurrió el sistema de partidos desde 1982. Después de una fase fundacional, entre 1982 y 1985, que se expresó en el desplazamiento del corporativismo sindical por la representación partidista y el encauzamiento del conflicto político a las pautas institucionales de la

dinámica parlamentaria entre oficialismo y oposición, se inició una fase de adaptación y estabilidad que transcurrió entre 1985-2002. Esta fase se caracterizó por el predominio de una tendencia centrípeta merced a la articulación hegemónica de la democracia representativa y el neoliberalismo económico que incentivaba el establecimiento de pactos para la conformación de gobiernos de coalición, con la presencia alternada de tres partidos en la conducción presidencial (MNR, MIR y ADN) y el surgimiento de dos nuevos partidos (UCS y Condepa), como expresiones de neopopulismo, que se adaptaron tempranamente a las pautas de funcionamiento del sistema de partidos (Mayorga Fernando 2001). Esta fase tuvo un hito importante en 1997 con el ingreso de UCS y Condepa a la coalición gubernamental que apoyó a Bánzer pero empezó a mostrar señales de agotamiento en 1999 a raíz de la crisis que sufrieron ambos partidos por los resultados negativos que obtuvieron en las elecciones municipales de ese año (Cuadro 6) y por la emergencia de nuevos actores políticos que ingresaron a disputar el espacio ocupado por el neopopulismo con un discurso de cuestionamiento al modelo económico y a los partidos tradicionales. Precisamente, estos nuevos actores políticos, sobre todo aquellos vinculados a –y surgidos de– organizaciones sociales y sindicatos, son los protagonistas que irrumpen en el escenario político en los comicios de 2002 y su presencia marca el fin de la fase de adaptación y estabilidad del sistema de partidos.

En 2002, las negociaciones post-electorales concluyeron con el establecimiento de un pacto entre MNR y MIR, sin embargo, el hecho más relevante era la presencia parlamentaria de MAS, MIP y NFR que sustituyeron a ADN y UCS, con escasa votación, y a Condepa, que perdió su personería jurídica (Cuadro 8).

Los cambios no se limitaron a estos desplazamientos en la preferencia electoral sino se manifestaron en la presencia de nuevas interpelaciones en la discursividad política, puesto que MAS y MIP esgrimieron posiciones contestatarias. Este nuevo escenario político e ideológico provocó un desplazamiento de la tendencia centrípeta que caracterizaba las interacciones en el sistema de partidos por una tendencia a la polarización política, debido a la presencia de la izquierda con fuerza congresal.

Octubre de 2003, referéndum y elecciones municipales de 2004

Cumplido el primer año de gestión gubernamental se produjo una ampliación de la coalición de gobierno con el ingreso de NFR en un afán de debilitar a la oposición y disponer de una mayoría parlamentaria cercana a los dos tercios de votos en el congreso, hecho que resultó ineficaz. Empero, el efecto negati-

vo más evidente del ingreso de NFR al gobierno fue el fracaso de un intento de concertación propugnado por la Iglesia católica, puesto que la oposición parlamentaria –circunscrita al MAS y al MIP– dejó de ser considerada por la coalición de gobierno como interlocutora válida para la definición de los temas conflictivos suponiendo que su mayoría congresal eliminaba la necesidad de un acuerdo con la oposición y que el respaldo de las Fuerzas Armadas era la garantía del control represivo de las protestas extraparlamentarias.

Es decir, la política institucional se recluyó en sus pautas instrumentales prescindiendo de la oposición y el gobierno apostó al control policial y militar de la protesta, en cambio, la acción de la oposición parlamentaria se desplazó a las calles adoptando medidas de presión y articulándose a los movimientos sociales y sindicatos. El desenlace fue la renuncia presidencial y la sucesión constitucional.

Como vimos, la gestión gubernamental de Carlos Mesa se caracterizó por conflictos con el parlamento porque el comportamiento congresal estuvo sometido a las presiones externas de actores sociales (comités cívicos, sindicatos, entidades empresariales) que ahondaron los problemas internos en los partidos expresados en fracturas en las bancadas parlamentarias. De la lógica de pactos que subordinaba la labor congresal al poder ejecutivo, los partidos transitaron a un accionar autónomo que exacerbó los conflictos entre poderes. Aparte de la influencia que tuvo esa modalidad de relación entre poder ejecutivo y legislativo, los partidos enfrentaron dos eventos electorales –referéndum y elecciones municipales– que pusieron en evidencia las tendencias de cambio en el escenario político.

El referéndum sobre hidrocarburos se realizó nueve meses después del cambio de gobierno y la mayoría de los partidos adoptaron una actitud pasiva, excepto el MAS que asumió un protagonismo directo en la elaboración de las preguntas de esa consulta y en la movilización de su aparato sindical para promover el voto por el “sí” en tres preguntas y por el “no” en las dos últimas⁵. Además, su decisión fue determinante para anular un boicot promovido por sectores radicales de izquierda que criticaban las preguntas del referéndum porque no expresaban la demanda de nacionalización, y el tibio rechazo de sectores empresariales que consideraban que estaban orientadas a ahuyentar la inversión extranjera. Algunos partidos optaron por la anulación de la consulta a través de demandas de inconstitucionalidad que fueron rechazadas, luego, promovieron la abstención y el “no” en general, mientras otros apostaron al voto afirmativo en las cinco preguntas para distinguirse de las posiciones del MAS.

Los resultados fueron un triunfo para el presidente y para el MAS, en este último caso porque la orientación del voto demostró su arraigo en las regiones donde había vencido en los comicios de 2002. El “sí” venció en las tres primeras preguntas con porcentajes de 86%, 92% y 87% y en las dos restantes con 55% y 62%, considerando los votos válidos. Esta diferencia en las preguntas 4 y 5 se explica porque el MAS desplegó una campaña por el “no” en ambos casos y la distribución del voto muestra la eficacia de esa interpe-lación puesto que su consigna venció en las regiones donde había obtenido el primer lugar en los comicios de 2002, demostrando su implantación territorial y la consistencia de las redes sindicales y políticas articuladas en torno a la figura de Evo Morales (Romero 2004).

Con el antecedente de esa votación, las elecciones municipales realiza-das cinco meses después ratificarían la primacía del MAS, convertido en la fuerza política más importante del sistema de partidos. En diciembre de 2004, el MAS obtuvo el primer lugar con 18.5 % de votos mientras que los partidos de la ex-coalición sufrieron una merma considerable. El caso más expresivo fue el de NFR que perdió inclusive en la ciudad donde había vencido en tres anteriores elecciones municipales. Otro partido surgido en 2002, el MIP, disminu-yó su votación y ahondó su crisis interna. Ambos partidos terminarían perdiendo su personería jurídica en 2005 por su baja votación. Estos despla-zamientos en las preferencias electorales se tradujeron en el fortalecimiento de fuerzas locales y en la incursión de nuevos partidos en el escenario polí-tico. Así, por ejemplo, el Movimiento Sin Miedo (MSM), una agrupación de izquierda que venció en la sede de gobierno y ocupó el segundo lugar a nivel nacional, mientras que Unidad Nacional (UN) y Plan Progreso (PP), flaman-tes organizaciones obtuvieron porcentajes similares a los alcanzados por los partidos tradicionales (Cuadro 7).

En suma, el MAS se constituyó en el único partido con relativa presen-cia nacional pero su desempeño electoral se ensombreció porque no venció en ninguna de las principales ciudades pese al despliegue de una estrategia electoral dirigida a los sectores medios urbanos con la postulación de candi-datos de perfil intelectual y profesional. Por su parte, los restantes partidos asumieron el carácter de fuerzas regionales. Este mapa electoral, con un parti-do vencedor con menos del 20% y los cinco siguientes con una votación menor al 10%, muestra una alta dispersión del voto. Dispersión explicable por la especificidad local de los comicios municipales y por el desgaste de los partidos tradicionales y, también, porque se trataba del primer evento elec-toral con la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas

Cuadro 7. Elecciones municipales, 2004

Partido	Votación	Porcentaje
MAS	494.422	18.48%
MSM	233.827	8.74%
MIR-NM	189.733	7.09%
MNR	177.913	6.65%
PP	176.022	6.58%
UN	157.514	5.89%
NFR	79.975	2.99%
UCS	74.192	2.77%
ADN	68.111	2.55%
MBL	67.393	2.52%
MIP	65.132	2.43%
MOVIBOL	40.840	1.53%
FRI	12.766	0.48%
ASP	6.178	0.23%
VIMA	5.647	0.21%
FREPAB	1.982	0.07%
PDC	1.310	0.05%
Votos emitidos: 1'852.957		

Cuadro 8. Elecciones nacionales, 2002

Partido	Votación	Porcentaje
MNR	624.126	22.46
MAS	581.884	20.94
NFR	581.163	20.91
MIR	453.375	16.32
MIP	169.239	6.09
UCS	153.210	5.51
ADN	94.386	3.40
MCC	17.405	0.63
PS	18.162	0.65
Condepa	10.336	0.37
Votos emitidos: 2'994.065		

que –pese a no tener un desempeño relevante– fragmentaron la votación puesto que se inscribieron alrededor de cuatrocientas siglas repartidas en 324 municipios en disputa y obtuvieron, en total, alrededor de un tercio de la votación. Vale resaltar que el partido más perjudicado con esta participación fue el MAS puesto que muchas organizaciones campesinas e indígenas que actuaron como sus aliados en los comicios generales de 2002 optaron, en esta oportunidad, por una acción autónoma respecto al partido de Evo Morales.

Sin embargo, la crisis política tenía manifestaciones pendientes y los hechos de junio de 2005 –seis meses después de los comicios municipales– condujeron a otra modificación del proceso político con consecuencias para el sistema de partidos y para las estrategias electorales de las fuerzas políticas.

Las elecciones de 2005 y el triunfo histórico del MAS

Como vimos, la crisis política de junio de 2005 fue resuelta mediante renuncia presidencial y sucesión constitucional y con un acuerdo congresal para aprobar la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales y la realización, por primera vez, de prefectos departamentales. Este acuerdo incluyó, además, la realización simultánea del referéndum sobre autonomías de-

partamentales y la elección de constituyentes en julio de 2006. El traslado de estas demandas para su tratamiento en la asamblea constituyente puso al descubierto la debilidad generalizada de los partidos y la ausencia de un actor político con capacidad hegemónica para articularlas en un nuevo proyecto estatal. Sin embargo, los resultados de 2005 produjeron muchas sorpresas después de un proceso electoral caracterizado por la articulación de las fuerzas de izquierda en torno a la candidatura de Evo Morales y el intento de polarización del escenario electoral promovido por la candidatura de Jorge Quiroga, al mando de una agrupación ciudadana que congregó a militantes de su ex partido –ADN– y de otros partidos tradicionales.

Con una votación nacional de 53.7%, el MAS obtuvo el primer lugar en cinco de nueve departamentos (provincias) y el segundo lugar en los importantes distritos de Tarija y Santa Cruz. Así, el MAS se constituye en la fuerza más importante de un renovado sistema de partidos que muestra la irrupción de dos nuevas fuerzas: PODEMOS que obtuvo el 28.6 %, y UN que alcanzó el 7.8%, y la persistencia del MNR con 6.5 %, único sobreviviente del esquema partidista vigente en las dos últimas décadas (Cuadro 9). De esta manera, el sistema de partidos se limita a la presencia de cuatro fuerzas parlamentarias y la izquierda se condensa en el MAS, porque el MIP perdió su personería jurídica al obtener una exigua votación, al igual que NFR. Otra novedad es el supremacía congresal del MAS con 84 de 157 parlamentarios (72 de 130 diputados y 12 de 27 senadores) que le permite controlar la cámara de Diputados y asumir la presidencia del Senado merced al apoyo de fuerzas menores. En suma, la transformación del sistema de partidos se expresa en una modificación sustantiva en su composición puesto que desaparecen del escenario parlamentario ADN, MIR, NFR y MIP –cuatro de las cinco fuerzas del último congreso– y se ordena en torno a la presencia de una fuerza mayoritaria –el MAS– que redefine las interacciones partidistas bajo una lógica distinta a la prevaleciente cuando la *democracia pactada* definía el funcionamiento del sistema de partidos.

Cuadro 9. Elecciones Nacionales, 2005

Partido	Votación	Porcentaje
MAS	1'544.374	53.74%
PODEMOS	821.745	28.59%
UN	224.090	7.79%
MNR	185.859	6.47%
MIP	61.948	2.16%
NFR	19.667	0.68%
FREPAB	8.737	0.30%
USTB	7.381	0.26%
Votos emitidos: 3'102.417		

MAS: de la protesta a la propuesta

Orígenes y desempeño electoral

La historia de este partido presenta los avatares típicos de adaptación al entorno institucional puesto que el origen de su conformación está imbricado con la trayectoria del sindicalismo campesino y no transcurre de manera sincrónica con la historia de la sigla del partido que sufrió varias vicisitudes antes de convertirse en referente de la izquierda boliviana. El origen de la emergencia del MAS tiene doble ruta: por una parte, se enmarca en un debate en el seno de la CSUTCB en torno a la decisión de conformar un “instrumento político” de los sindicatos campesinos y los pueblos indígenas, empeño que data de la década de los noventa y se enmarca en la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento” de América Latina. Por otra, se asienta en la fortaleza de las organizaciones sindicales de los campesinos productores de hoja de coca y en las relaciones entre sindicatos y algunas fuerzas de izquierda tradicional con escasa presencia parlamentaria.

Desde 1992, diversos congresos de la CSUTCB resolvieron encarar la organización de un partido político pero las divisiones internas y las pugnas entre sectores impidieron una acción orgánica, más aún, este tema fue motivo de una disputa adicional entre dirigentes. Estas circunstancias impidieron su participación electoral con una organización propia, motivo por el cual, en 1997, algunos dirigentes se postularon como candidatos de un frente, la Izquierda Unida, vinculada al PCB y obtuvieron alrededor del 4% de la votación nacional (Cuadro 6) con una fuerte concentración de votos en las zonas de influencia de los sindicatos de productores de coca puesto que su principal dirigente, Evo Morales, fue candidato a diputado uninominal consiguiendo la votación más alta del país. Las razones de esta participación bajo una sigla de la izquierda tradicional no tienen que ver solamente con la irresolución de las disputas internas en la CSUTCB sino con el fracaso de un intento de obtención de personería jurídica ante la Corte Nacional Electoral para un partido denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Este intento fracasó por las pugnas de liderazgo entre Evo Morales y otros dirigentes campesinos hasta que, a principios de 1999, la utilización de una sigla –MAS– permitió a los seguidores de Evo Morales participar en las elecciones municipales de 1999. Esta sigla correspondía a una minúscula organización de izquierda proveniente de una división en el seno de un partido tradicional en extinción –Falange Socialista Boliviana– que había obtenido su personería jurídica en

1987 y ofreció su nombre al partido en ciernes de Evo Morales, denotando las dificultades para su incorporación formal al escenario político. Las pugnas al interior del sindicalismo campesino en su organismo matriz nacional provocaron que el apoyo electoral al MAS se circunscriba a las organizaciones sindicales de la zona del trópico y de los valles de Cochabamba, obteniendo alrededor de 80 mil votos en los comicios generales de 1997 -con la sigla IU- y algo más de 65 mil -como MAS- en los comicios municipales de 1999 (Cuadros 6 y 7). Se trataba de una votación concentrada regionalmente que le permitió acceder al parlamento con cuatro diputados uninominales y controlar varios municipios en zonas rurales. La labor del MAS era marginal y secundaria en el parlamento, empero, las acciones de protesta de los sindicatos cocaleros revestían particular importancia debido a los conflictos provocados por la política de erradicación de plantaciones de hoja de coca implementada bajo presión norteamericana. En enero de 2002, la presión norteamericana adquirió otro matiz puesto que Evo Morales fue expulsado del parlamento con la acusación de haber “abusado” de su inmunidad parlamentaria para “incitar a cometer acciones violentas que luego generaron graves delitos penales”, en referencia a los enfrentamientos entre productores de hojas de coca y fuerzas policiales que provocaron varias víctimas en un conflicto suscitado por disposiciones gubernamentales relativas a la comercialización de hoja de coca. La mayoría oficialista adoptó esa decisión contra un diputado opositor y sus consecuencias políticas se reflejarían en los comicios de junio de ese año.

La injerencia norteamericana tuvo un efecto similar en el proceso electoral de 2002, puesto que su embajador realizó declaraciones públicas en contra de Evo Morales advirtiéndole al electorado sobre las consecuencias negativas que tendría la victoria de un candidato presidencial “vinculado al narcotráfico”. Contra todos los pronósticos, el MAS obtuvo el segundo lugar con 20.9% de la votación y su candidato pasó a disputar la presidencia en la segunda vuelta congresal frente a Sánchez de Lozada del MNR que había obtenido el 22.5% (Cuadro 1). Con victorias electorales en cuatro de los nueve departamentos y una importante representación parlamentaria, el MAS se convirtió en un partido relevante y decisivo. La fuerza regional asentada en los sindicatos de productores de hoja de coca se transformó en un partido nacional con presencia en organizaciones sindicales, comunidades indígenas y sectores populares urbanos.

Después de la caída de Sánchez de Lozada, el MAS se transformó en la principal fuerza política. Su influencia fue notoria en el referéndum sobre hidrocarburos puesto que definió algunas preguntas de la consulta y propició

la participación ciudadana a contramano de otros grupos de izquierda que optaron por el boicot y en oposición a sectores empresariales que cuestionaban el referéndum. Los resultados fueron favorables a sus directrices poniendo en evidencia su arraigo electoral puesto que en las zonas donde había vencido en los comicios de 2002 se registraron votaciones afines a sus consignas.

La adopción de una posición moderada y centrista provocó un incremento de percepciones positiva respecto a la figura de Evo Morales en las encuestas y su partido se convirtió en el favorito en las elecciones municipales de diciembre de 2004, en las que obtuvo el primer lugar con 18.5% de la votación (Cuadro 7). Es decir, las consecuencias de los cambios provocados por los hechos de octubre de 2003 se manifestaron con una tendencia del voto favorable a la izquierda y adversa a los partidos tradicionales, sin embargo, otro dato relevante fue la disminución de votación favorable al MIP y a NFR denotando las dificultades que enfrentaron estos partidos para consolidarse como fuerzas relevantes. La crisis de los partidos de la coalición que apoyó a Sánchez de Lozada, los problemas internos en el MIP, la debacle de NFR, el surgimiento de nuevos partidos con arraigo regional, la exacerbación de la personalización de la representación en el nivel municipal y la apertura nuevas modalidades organizativas provocaron “una inédita dispersión del voto nacional” (Romero 2005: 40) que tuvo, sin embargo, la novedad de la primacía electoral de la izquierda.

La victoria electoral del MAS no fue considerada un triunfo político –pese a que se constituyó en el único partido con presencia nacional– porque no obtuvo el control de las alcaldías más importantes. El descenso en su votación, respecto a los comicios generales de 2002, se explica, entre otras razones, por el carácter localista de ese evento y el estreno de agrupaciones ciudadana y pueblos indígenas en la competencia electoral. Aunque estas no tuvieron una participación auspiciosa, la presencia de estas candidaturas provocó una mayor dispersión en las preferencias electorales y la mengua de la votación por el MAS que, en 2002, había articulado una suerte de coalición con la presencia de organizaciones campesinas e indígenas que optaron por una participación directa en el ámbito municipal. La consolidación de su base electoral predominantemente rural ratificó su perfil campesino e indígena y aunque, a diferencia de sus adversarios, no sufrió un menoscabo en sus “cotos de caza” no enfrentó exitosamente el desafío de incursionar con similar fuerza en los centros urbanos más importantes y en aquellas regiones en las que carecía de presencia. Este rasgo deficitario se modificaría de manera nítida en los comicios presidenciales.

Los resultados de diciembre de 2005 muestra la consolidación del MAS como la principal fuerza política nacional con resultados inéditos en términos de votación y representación parlamentaria. Se constituye de esta manera en el único referente de la izquierda partidista, con una presencia diseminada en casi todos los distritos electorales, incluyendo regiones antes adversas, y cosechando apoyo en los diversos sectores sociales.

Características organizativas, estilo de acción y discurso político

El MAS es un partido atípico en términos organizativos. Su vínculo con los sindicatos agrarios y comunidades indígenas le proporciona rasgos peculiares puesto que las fronteras entre movimiento sindical y organización política son difusas. Su origen vinculado al debate en el seno de la CSUTCB respecto a la creación de un “instrumento político” de los sindicatos campesinos y los pueblos indígenas establece esa característica central de su momento fundacional porque las decisiones se asumen bajo las pautas del asambleísmo de raigambre obrera-minera que, desde los años cincuenta, impregnó la cultura política del sindicalismo campesino. El papel de su líder expresa esa imbricación puesto que Evo Morales es jefe del partido y máximo dirigente de las Federaciones de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, una entidad que agrupa a los productores de hoja de coca de esa región. Su elección como diputado y su participación como candidato presidencial no modificó su rol como dirigente sindical y, de manera análoga, los dirigentes de las organizaciones de base (sindicatos, centrales campesinas y federaciones regionales) asumen puestos de dirección en la organización política y cargos de representación en el parlamento y en los consejos municipales, por lo tanto, responden a criterios de selección que provienen de su desempeño sindical. Tanto la selección de candidatos como la adopción de decisiones coyunturales se someten a esta lógica asambleísta y, de manera análoga, las directrices del partido se traducen en pautas para la acción sindical. En el despliegue de su estrategia electoral este núcleo organizativo sindical se amplió mediante alianzas con otros sectores organizados que siguen pautas similares y a través de acuerdos electorales con grupos de izquierda tradicional subordinados a las pautas sindicales. Las decisiones coyunturales y las definiciones tácticas del partido generalmente son resultado de su aprobación en reuniones de las organizaciones sindicales en las cuales las directrices de Evo Morales son determinantes.

Aunque existen antecedentes de participación electoral de dirigentes sindicales sin mediación partidista y la acción política es un rasgo típico del sindicalismo boliviano, el MAS es un hecho inédito de auto-representación popular en el seno de la izquierda boliviana. Su base social predominantemente campesina e indígena le confiere, además, un carácter peculiar puesto que incorpora tradiciones y costumbres autóctonas que no formaban parte del acervo organizativo de la izquierda boliviana. Con un discurso que asienta su legitimidad en la “consulta a las bases”, el MAS recrea, sin embargo, las pautas autoritarias que caracterizan la conducta de los partidos políticos de izquierda que operan bajo la lógica del centralismo democrático y el caudillismo que predomina en la política en general, sin embargo, se constituye en el único partido boliviano que comporta mecanismos de rendición de cuentas por parte de los dirigentes, aunque no se realizan elecciones internas con el criterio del voto individual sino bajo la premisa de selección de dirigentes y/o candidatos en asambleas que involucran a la militancia y a los afiliados al sindicato. Estas características parecen dar cuenta de un incipiente proceso de institucionalización partidista que convive con un elevado grado de normatividad sindical en algunos ámbitos de la red organizativa que forma parte del partido. Sin duda, desde una lectura de formalidad institucional, como su apego a la Ley de Partidos Políticos, estamos ante una organización política en ciernes, empero, considerando su densidad organizativa proveniente del mundo sindical se trata del partido político menos sujeto a la lógica caudillista y poco propenso al riesgo de una “oligarquización” en sus filas.

Esta mixtura de pautas organizativas también incide en su estilo de acción política que combina la labor parlamentaria del partido con medidas de presión extraparlamentaria realizadas por los sindicatos –bloqueos de carreteras, marchas, huelgas de hambre– que ponen en evidencia una conflictiva relación con la democracia representativa. La consigna esgrimida por Evo Morales como el principal desafío del MAS, “transitar de la protesta a la propuesta”, refleja esta tensión entre una tradición sindical contestataria mediante la acción directa y una estrategia política que pretende ampliar su capacidad interpelatoria. Con una historia matizada, desde mediados de la década de los ochenta, por enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares en el marco de la política de erradicación de las plantaciones de hoja de coca y movilizaciones callejeras para plantear sus demandas, los métodos de lucha de los sindicatos cocaleros se combinan con la labor parlamentaria del partido.

Sin embargo, los resultados son ambiguos puesto que la consecución de objetivos mediante acciones extraparlamentarias se tradujo en desprestigio

ante otros sectores sociales, principalmente de clase media urbana, que estigmatizan la conducta del MAS con la figura del “bloqueo” de carreteras, un método antidemocrático que es utilizado de manera recurrente por diversos sectores sociales pero que es atribuido al MAS como rasgo predominante de su accionar. Esto pese a su activa participación en la realización del referéndum en julio de 2004 y a pesar de su apego a soluciones institucionales en los conflictos de octubre de 2003 y junio de 2005.

El discurso del MAS combina varios códigos ideológicos que recupera de la izquierda boliviana pero se distingue nítidamente del reduccionismo clasista y obrerista de los partidos marxistas. Rescata la crítica indigenista al proyecto de homogeneización cultural del nacionalismo revolucionario pero no esgrime el particularismo de las posturas multiculturalistas que caracterizan el discurso de otros grupos y partidos indígenas, como el MIP. Su crítica al neoliberalismo se traduce en un rescate del nacionalismo estatista del pasado que se refuerza con una postura “antiimperialista” resultante de su enfrentamiento directo a la política norteamericana de erradicación de plantaciones de coca, aunque su posición en relación a los hidrocarburos tiene matices respecto a las posturas de otros sectores de izquierda y su participación en los debates parlamentarios y procesos electorales se orientó hacia una propuesta de nacionalización sin confiscación ni expropiación de las inversiones extranjeras. En la medida que se mueve en dos campos, el de la subcultura de izquierda y en la discursividad política general, su discurso realiza concesiones retóricas a sus adversarios de izquierda y asume posiciones cercanas a un nacionalismo maximalista pero matiza su interpelación cuando compete con sus rivales de “derecha” u “oligárquicos”.

Otro elemento que distingue al MAS de la izquierda tradicional es su apelación a reivindicaciones étnico-culturales, empero su discurso no asume el carácter de un proyecto indigenista excluyente, tal como acontece con el MIP y su propuesta de “nación aymara” ni con otras posturas milenaristas que plantean la “refundación” de Bolivia como Kollasuyo. Su rescate de lo étnico-cultural no se contrapone al nacionalismo pero resignifica la noción de pueblo –el sujeto revolucionario de los discursos populistas y nacionalistas– con la noción de “pueblos indígenas”, como unidades que forman parte de una nación boliviana multiétnica y pluricultural. Su confrontación con la política norteamericana de erradicación de plantaciones de coca está revestida de otro componente cultural que se resume en “la defensa de la hoja sagrada de coca”, aunque su reclamo no contradice los postulados del neoliberalismo que critica puesto que rechaza la intervención gubernamental –boliviana o

norteamericana— en la definición de la producción y comercialización de la hoja de coca. En esa medida, no es un “movimiento al socialismo” sino un partido de izquierda nacionalista con base campesina y reivindicaciones étnico-culturales, por ello, su nombre original —Asamblea por la Soberanía de los Pueblos— que algunas veces adjuntó a su sigla expresa de mejor manera su propuesta: “asamblea” porque rescata la lógica sindical y comunitaria para la toma de decisiones, “soberanía” porque su lucha se despliega contra la injerencia norteamericana y por el fortalecimiento del Estado frente a las empresas transnacionales, y “los pueblos” porque desplaza la noción de pueblo, como alianza de clases del nacionalismo revolucionario o como frente popular de la izquierda marxista, por la idea de “pueblos indígenas”, portadores de una cosmovisión que resistió quinientos años de dominación colonial y explotación capitalista. Se trata, pues, de un discurso complejo por efecto de la confluencia de elementos ideológicos de diversa impronta que se combinan de manera precaria y denotan una debilidad programática.

La figura de su líder, Evo Morales, condensa en cierta medida los rasgos del discurso del MAS por su papel dirigente a la cabeza de los sindicatos campesinos productores de hoja de coca enfrentados a la política norteamericana, por su trayectoria en el campo de la izquierda sindical y partidista y porque es el primer indio/indígena⁶ que accede a la presidencia de la República en una sociedad caracterizada por la discriminación de la mayoritaria población campesina e indígena y su exclusión fáctica del escenario político hasta comienzos del siglo XXI. Con la irrupción del MAS y del MIP, la izquierda boliviana inauguró un tercer ciclo en su historia. De los partidos obreros de carácter marxista fundados en la década de los 40’ y los partidos socialistas y socialdemócratas de origen universitario surgidos en la década de los 60’ a los partidos campesinos e indígenas del siglo XXI que esgrimen propuestas nacionalistas y proyectos de sociedad multiétnica y pluricultural en el marco de la competencia electoral.

Con una base electoral estable, arraigo social, fortaleza organizativa —aunque con déficit de institucionalización— y liderazgo propio, el MAS expresa la irrupción de nuevas demandas y nuevas identidades en la política boliviana, con capacidad de incidir en el decurso del proceso democrático y en el cariz de las reformas estatales, merced a su conversión en la fuerza más relevante del sistema de partidos.

Nuevo escenario político y perspectivas del gobierno del MAS

Antes de examinar las perspectivas de la gestión gubernamental al mando de Evo Morales es necesario señalar que los rasgos de polarización que caracterizaron el proceso político en los últimos cinco años es susceptible de atenuarse debido a la legitimidad presidencial que proviene de las urnas y a las coincidencias programáticas entre las principales candidaturas en torno a los temas centrales de la campaña electoral: una política hidrocarburífera con énfasis en un mayor protagonismo estatal como respuesta a las demandas de nacionalización; la realización de la asamblea constituyente para el rediseño de las normas que vinculan Estado, economía, política y sociedad; y, finalmente, la implementación progresiva de las autonomías departamentales como un proceso de reforma del modelo centralista del Estado.

El nuevo escenario político institucional presenta tres dimensiones problemáticas que deben ser enfrentadas por el gobierno de Evo Morales para configurar de un nuevo esquema de gobernabilidad democrática: se trata de las relaciones entre el poder ejecutivo y el congreso nacional, los vínculos entre el gobierno central y las autoridades regionales, así como, las articulaciones entre el partido gobernante y los movimientos sociales. Esta tríada de relaciones muestra un cuadro complejo de actores políticos y sociales que exige un manejo equilibrado de la gestión política en la medida que su accionar se asienta en demandas disímiles y, en cierta medida, contrapuestas. Veamos esas tres dimensiones, a partir de señalar que los resultados electorales han reducido el margen de incertidumbre y los riesgos de una reedición automática de la conflictividad de los últimos años. En primer lugar, la gobernabilidad no se concentra en las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo y, en todo caso, no existen posibilidades ciertas de conformación de una coalición opositora al MAS que se traduzca en un bloqueo legislativo a las iniciativas presidenciales. Existe, más bien, la posibilidad de cumplir la agenda de reformas en torno a la realización de la asamblea constituyente y el referéndum sobre autonomías departamentales a partir de consensos básicos y acuerdos específicos en el escenario parlamentario. En segundo lugar, la modificación de los vínculos entre las regiones y el Estado con la existencia de autoridades políticas departamentales –prefectos– elegidas en las urnas no constituye un escenario adverso al nuevo gobierno si se considera que no existe una corriente política dominante en las regiones. Los cuatro prefectos con mayor influencia –La Paz, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba– responden a distintas fuerzas políticas o tienen como rasgo central una nítida personalización en

la representación. En esa medida, las relaciones bilaterales caracterizarán las negociaciones regionales con el presidente de la República disminuyendo las posibilidades y los riesgos de una acción corporativa. En tercer lugar, la distribución territorial y social del voto a favor de Evo Morales y la raigambre sindical y comunitaria de su organización política impiden que, en el corto plazo, las demandas de algunos movimientos sociales más radicales en sus propuestas –como, por ejemplo, en el sentido de la nacionalización de los hidrocarburos o en el tema tierra/territorio– constituyan un factor de presión para la toma de decisiones del futuro gobierno. Sin embargo, esta relación se constituye en el punto de mayor alerta porque podría provocar una radicalización en las decisiones del gobierno, abriendo fisuras con el congreso y provocando tensiones en la relación con algunas regiones. Por ello, la importancia de la capacidad de gestión política concentrada en el presidente de la República que, empero, tiene como capital político una incuestionable victoria en las urnas y la posibilidad de reinventar la democracia, fortaleciéndola.

Notas

- 1 Sociólogo. Doctor en Ciencia Política. Director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS) de la Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia.
- 2 La norma constitucional establece que la elección del binomio presidencial se traslada al congreso cuando ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta de votos. Antes de la reforma constitucional de 1994, las tres fórmulas más votadas participaban en esta “segunda vuelta” congresal. En la actualidad, el primer y segundo binomios y, en caso de inexistencia de mayoría después de tres rondas de votación congresal, el vencedor en las urnas asume la presidencia. Después de la experiencia negativa de la UDP (1982-1985), se establecieron diversos pactos congresales para elegir presidente y conformar gobierno de coalición: entre 1985-1989, el gobierno de Paz Estenssoro del MNR con el apoyo –circunscrito al parlamento– de ADN; entre 1989-1993, Paz Zamora del MIR en alianza con ADN; entre 1993-1997, Sánchez de Lozada del MNR con apoyo de UCS y MBL; entre 1997-2002, Bánzer Suárez de ADN con el sostén del MIR, UCS y Condepa; en 2002, fue reelegido Sánchez de Lozada del MNR con apoyo del MIR, UCS y, posteriormente, NFR.
- 3 Nacido en una comunidad aymara en el departamento de Oruro y emigrado a la zona de producción de hoja de coca a principios de la década de los ochenta,

Evo Morales es el jefe del MAS desde su fundación en 1999. En junio de 2002 fue elegido parlamentario con el mayor porcentaje de votos obtenidos por un diputado uninominal y alcanzó el segundo lugar como candidato presidencial. Si incursión en la arena parlamentaria se produjo en 1997, siendo elegido diputado uninominal como parte de la bancada del frente Izquierda Unida, sigla que fue utilizada por los sindicatos de productores de hoja de coca para incursionar en la escena política y obtener cuatro curules. Es el principal dirigente de las seis federaciones sindicales de productores de hoja de coca del trópico de Cochabamba, iniciando su carrera sindical como secretario de deportes en 1983 hasta asumir el cargo de secretario ejecutivo en 1988, siendo reelecto hasta la fecha. Felipe Quispe, aymara originario de una comunidad cercana al lago Titicaca, fue candidato presidencial en 2002, su primera incursión electoral, y elegido diputado por el departamento de La Paz, empero, a los pocos meses renunció a su curul debido a discrepancias en la reducida bancada del MIP, fundado en noviembre de 2000. Sin carrera sindical previa y a partir de la fama que adquirió por su apresamiento bajo la acusación de terrorismo y levantamiento armado al mando de un grupo de activistas de filiación indigenista y marxista, se hizo cargo de la conducción de la confederación nacional de sindicatos campesinos en 1998, Pese a su protagonismo en los levantamientos campesinos, su liderazgo fue impugnado y la CSTUCB se fracturó en 2001 en dos tendencias, una de ellas vinculada al MAS. Al respecto, Quispe 2003 y Albó 2002.

- 4 Utilizamos esta denominación convencional para referirnos a las organizaciones políticas fundadas con anterioridad a la transición democrática y que tuvieron una presencia protagónica en el sistema de partidos en el ciclo de la *democracia pactada*. El MNR es un partido en vigencia desde la década de los cuarenta y protagonista de la revolución nacionalista de 1952. El MIR se fundó a principios de los años setenta y como corriente de orientación socialdemócrata jugó un papel importante en la transición democrática. ADN es un partido de tinte conservador organizado en 1979 en torno a la figura del ex-dictador Bánzer. Aunque provienen de distintas vertientes ideológicas convergieron en una posición centrista afín al neoliberalismo en economía y a la democracia representativa en política. En 2005, ADN y MIR no participaron en la contienda presidencial y el MNR obtuvo alrededor del 6% de votos.
- 5 La primera pregunta se refería a la abrogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada en 1996 por Sánchez de Lozada. La segunda inquiría sobre la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado. La tercera pregunta indagaba sobre el acuerdo o desacuerdo

- con la refundación de la empresa estatal petrolera y su participación en la cadena productiva. La cuarta se refería a la política internacional del presidente que planteaba utilizar el gas como recurso estratégico para solucionar el enclaustramiento marítimo del país. Finalmente, la quinta pregunta estaba dirigida a indagar acerca de la exportación del gas sobre la base de una política nacional que asegure el consumo interno y fomente su industrialización, establezca impuestos y/o regalías a las empresas en un cincuenta por ciento del valor de la producción de petróleo y gas y destine esos recursos a salud, educación, caminos y empleos.
- 6 Las ideas y las creencias, decía Ortega y Gasset, se distinguen porque “ideas tenemos”, en cambio, “creencias somos”. Es decir, no son los juicios los que nos constituyen como sujetos en la interacción social sino los prejuicios y, en la sociedad boliviana, los prejuicios tienen connotación étnica. La discriminación tiene múltiples facetas, se manifiesta en las palabras de uso corriente en la vida cotidiana y se reproduce en el espacio público: si el término “indígena” presenta connotaciones positivas en el espacio de discursividad política (pueblos indígenas, derechos indígenas), el término “indio”, en cambio, es peyorativo y remite a una taxonomía en la cual los indios (no importa si son quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos, ayoreos u otros) son situados en el último lugar de una imaginaria jerarquía social que no se modifica por la condición económica o nivel educativo de las personas. Por lo tanto, el poder político era (y es, porque se trata de un prejuicio colectivo internalizado inclusive por las propias víctimas de la discriminación) considerado un espacio reservado a las élites. La construcción de democracia, entre otros procesos, empezó a modificar estos prejuicios y los resultados electorales de 2002 y, particularmente, de diciembre de 2005 constituyen una demostración positiva de ese proceso. El arribo de Evo Morales a la presidencia permite la eliminación de un prejuicio colonialista que se manifestaba en el rechazo taxativo a esa posibilidad por su condición étnica, “porque es indio” –razón a la que se sumaban las diferencias ideológicas y políticas–, sacando a relucir el peso de las creencias en una sociedad que se reproduce con estos atavismos a cuestas y, quizás por ello, emprende procesos de cambio.

Referencias bibliográficas

- ALBÓ, Xavier. 2002. *Pueblos indios en la política*. La Paz: Plural/Cipca.
- GAMARRA, Eduardo. 1992. “Presidencialismo híbrido y democratización” en Mayorga René, editor, *Democracia y gobernabilidad en América Latina* (Caracas: Nueva Sociedad).
- MAYORGA, Fernando. 2001. *Neopopulismo y democracia*. Compadres y padrinos en la política boliviana. La Paz: Plural.
- MAYORGA, René. 2002. “La metamorfosis del sistema de partidos” en *Opiniones y análisis*. La Paz: Fundemos, Núm. 60.
- QUISPE, Ayar. 2003. *Indios contra indios*. La Paz: Nuevo Siglo.
- ROMERO, Salvador. 2004. “El referéndum 2004: una interpretación de los resultados”, en *Opiniones y Análisis*. La Paz: Fundemos, Núm. 70.
- ROMERO, Salvador. 2005. En la bifurcación del camino. *Análisis de los resultados de la elecciones municipales 2004*. La Paz: Corte Nacional Electoral.